

PRONUNCIAMIENTO DE LA UCA ANTE LA NUEVA SITUACION DE EL PAIS (FEBRERO/80)

I.- Introducción

Los graves acontecimientos ocurridos a lo largo de los días transcurridos desde nuestro último Pronunciamiento (noviembre 14, 1979) nos han exigido reflexionar de nuevo sobre lo que está sucediendo en el país. Decíamos entonces que "nuestra Universidad atenderá al proceso" y que "nuestro compromiso es con el país entero y, dada su división interna, ese compromiso pasa por las mayorías oprimidas en sus luchas de liberación". Lo hacemos una vez más con el deseo de colaborar en la tarea patriótica de esclarecer la confusión y disipar la angustia, que la mala información, las campañas tendenciosas de la oligarquía y sus aliados, y los mismos conflictos reales y objetivos han creado en amplios sectores sociales. Pensamos especialmente en las mayorías populares, organizadas o no, con las que deseamos colaborar en la lucha desigual que libran contra las fuerzas más egoístas y crueles de nuestra sociedad.

Estos graves acontecimientos pueden centrarse en la represión sangrienta de la gigantesca manifestación popular del 22 de enero, que festejaba la constitución de una nueva unidad popular. Esa masacre condenada por cuantos mantienen un resto de dignidad no es sino un eslabón en una larga cadena de violencia que ha cobrado una intensidad y una velocidad crecientes.

La represión en efecto no terminó el 15 de octubre. La anterior Junta no la pudo dominar y dimitió. Las cosas no han cambiado todavía. Han empeorado. En este mes de

enero los Cuerpos de Seguridad y la Fuerza Armada han dado muerte por lo menos a 140 personas. Por su lado los grupos para-militares y para policiales han asesinado no menos de 110 personas. Todas las víctimas son de Organizaciones Populares o personas que se suponen simpatizantes de ellas.

Los grupos llamados guerrilleros han causado víctimas entre miembros de los Cuerpos de Seguridad, Fuerza Armada, antiguos miembros de ORDEN y semejantes en número no inferior a 40.

Pero con ser todas estas muertes hechos en sí gravísimos, no puede pasarse por alto tampoco el clima de incertidumbre y de desesperanza, que amenaza con detener el pulso del país, especialmente en lo que toca a la actividad económica. La resistencia tenaz a todo cambio serio de quienes pretenden retener todos sus privilegios en el interior y salvar a sus capitales en el exterior, contribuyendo así a "desnacionalizar" la Banca y a agudizar las contradicciones; los repetidos anuncios y promesas formales de reformas sin precisión de su contenido, extensión y modalidades; las huelgas, las tomas y el poder creciente de unas organizaciones populares de las que desconfían los inversionistas...todo aquello ha conducido al país a unos límites, que nuestro débil y dependiente sistema productivo no puede aguantar por mucho tiempo más.

Es hora entonces de pensar en soluciones que frenen la espiral de la violencia y que propicien un cambio político estable y viable. Pero esas soluciones no pueden encontrarse sino se analiza lo ocurrido en estos últimos dos meses y si no se propone una salida política que pueda enfrentar con garantía y con respaldo la grave situación económica.



II.- Deterioro del Proyecto del 15 de Octubre

En nuestro anterior Pronunciamiento, publicado un mes después de la insurrección militar, decíamos: "El proceso está sin definir" y "muchas fuerzas están al acecho para desvirtuar las posibilidades positivas del proceso". Esta fuerzas que ya habíamos identificado en aquella ocasión, acabaron por desvirtuar completamente la esperanza que nació del 15 de octubre. La oligarquía, enemigo principal de todo el proceso de cambio en favor de las mayorías, maniobró con todo el arsenal de medios de presión de que dispone hasta dejar el proceso reducido a un montón de palabras y gestos vacíos de contenido social y popular, a pesar de una serie de decretos importantes que no pudieron cobrar vigencia efectiva por falta de poder político.

En cuestión de dos meses se produjo dentro de la Fuerza Armada un desplazamiento del liderazgo y del poder efectivo de los oficiales jóvenes, que llevaron a cabo la insurrección, a los mandos tradicionales, entre ellos, especialmente coroneles veteranos que habían ocupado posiciones de poder en regímenes anteriores. Este desplazamiento que se efectuó en virtud de la estructura jerárquica del Ejército, tuvo tres consecuencias mortales para el proceso: a) Extinguió el fervor revolucionario de los insurrectos; b) Frenó el ímpetu de las reformas económicas y políticas y c) redujo la tolerancia por parte de la Fuerza Armada hacia las ideas y las acciones de los grupos opositores de la izquierda. En consecuencia este restablecimiento del "orden" jerárquico, trajo como resultado la neutralización de todo elemento revolucionario en la nueva estructura de poder. Las cosas regresaron a su cauce normal, abandonando definitivamente el cause revolucionario. Pero la "normalidad" para los altos mandos de la Fuerza Armada implicaba el asumir funciones que son propias del Poder Ejecutivo en otros regímenes no viciados por la experiencia inveterada de anteriores gobiernos militares. El alto mando militar fue adoptando actitudes y arrogándose poderes que sólo correspondían a la Junta de Gobierno. Surgió así un verdadero "Gobierno paralelo", que no sólo competía con el Gobierno formal sino que se colocó por encima de él en importantes cuestiones de seguridad y orden público. No es pues de extrañar que los miembros civiles de la Junta y los miembros



del Gabinete llegaron a sentirse como meros apéndices del poder militar.

Cuando los mandos que llamamos tradicionales, más acostumbrados que los jóvenes a tratar con la oligarquía, consumaron la recuperación del poder militar, comenzaron a frenarse las iniciativas, los proyectos de decretos y todo tipo de medidas que tendían a efectuar rápidamente cambios profundos e irreversibles en la estructura económica del país. Aquí jugaron en estrecha alianza con los peones y alfiles civiles que la oligarquía y sus aliados habían introducido en la Junta y en el Gabinete. Así se retardó innecesariamente el decreto de congelamiento de tierras, se frenó y se redujó la nacionalización del comercio exterior de la que se salvaron el algodón y los productos del mar, se retrasó la declaración de principios de la Reforma Agraria y en el orden político se bloqueó el estatuto constitucional.

Pero fue sin ninguna duda en la represión contra el pueblo organizado donde se hizo más patente el desplazamiento del poder militar y la constitución de hecho de un "Gobierno paralelo".

A principios de diciembre, las organizaciones populares, que habían dado una tregua significativa al Gobierno desde principios de noviembre, aceleraron las acciones reivindicativas particularmente en el campo. Algunas de ellas y, sobre todo, su acumulación, magnificadas por los medios de comunicación, resultaron intolerables al poder militar tradicional. Es posible que las organizaciones populares no calcularan bien la ecuación de poder real al interior del Estado y llevarán sus reivindicaciones, basadas en muchos años de espantosa explotación y miseria, demasiado lejos. En todo caso, el mando militar real, azuzado, chantajeado y halagado por unos medios de comunicación al servicio incondicional de la oligarquía y sus aliados, procedió primero moderadamente —gracias a los ingentes esfuerzos de los miembros civiles de la Junta— y luego con todo lujo de barbarie, a reprimir conflictos laborales y demostraciones de tipo político como en los peores tiempos de regímenes pasados. Así se añadieron víctimas tras víctimas a la ingente lista de los caídos desde el 15 de octubre.

Se ha afirmado que, si las organizaciones populares no hubieran efectuado tantas tomas de fincas y haciendas y no hubieran escalado sus demandas, las cosas hubieran sucedido de otro modo. Quizá se pudiera aceptar que la escalada de tomas y otras actividades político-reivindicativas en el campo aceleró el desenlace de un drama que se venía desarrollando



en los salones de Casa Presidencial y en las oficinas del alto mando. Pero parece claro que aun sin esas acciones reivindicativas el drama hubiera acabado de la misma forma. Una vez constituido un gobierno paralelo estrictamente militar con poca comprensión y simpatía para los movimientos populares y con mucha aceptación y apertura a los argumentos y problemas de las clases dominantes, la toma de partido con el gran capital y en contra de las organizaciones populares resultaba absolutamente inevitable.

El desplazamiento del poder real al interior de la Fuerza Armada se vio precedido, acompañado, apoyado y sancionado por la derecha más intransigente y combativa, que por medio de sus procedimientos habituales, a los que se sumaron las movilizaciones callejeras, prestó apoyo y dio su aplauso a la fracción del Ejército que considera como suya propia: los jefes militares de línea más dura y de inclinación más oligárquica.

Se intentó manipular a la Fuerza Armada, para que se decidiera a emprender estas acciones, con información parcial y viciada y la invocación exclusiva por parte del gran capital de conceptos y símbolos, como la Patria, la Constitución, la Bandera, el Himno Nacional, etc., que fueron sistemáticamente esgrimidos contra los cambios y las personas que los defendían. Tendieron así al Ejército la trampa de identificar la Patria con el statu quo y los patriotas con los opositores a los cambios estructurales. Esta trampa sigue tendida y algunos militares siguen cayendo en ella, consciente o inconscientemente, con lo cual pierden la oportunidad de identificarse con el pueblo.

En esta misma actividad de apoyo a los elementos más intransigentes y pro-oligárquicos del Ejército se insertan ciertos disturbios, tiroteos, rumores y confusión realizados por los brazos armados de la oligarquía y sus organizaciones para-militares. Procuraban así dar una justificación a quienes, en nombre de la paz y el trabajo, tratan desesperadamente de defender sus intereses y privilegios injustos. De la misma forma se pretendía dar un pretexto patriótico a la intervención del Ejército en pro de la propiedad privada en función individual y en defensa del capital más retrógrado y primitivo del país.

Pero, aunque la Fuerza Armada fue desviándose del espíritu inicial del 15 de octubre y fue poniendo freno al proceso de reformas estructurales, debe subrayarse que al interior del país el responsable último de la nueva situación han sido la oligarquía y los intereses económicos



que esa oligarquía defiende. La Fuerza Armada no constituye la causa última de los males estructurales, aunque sin ella o sin su consentimiento no podrían mantenerse ni los males estructurales ni las acciones represivas. La causa última sigue estando en el poder y la fuerza del capitalismo salvadoreño reforzado por el capitalismo internacional, especialmente por el guatemalteco en los momentos actuales.

III.- Crisis del Proyecto

Con todos estos antecedentes no es de extrañar que dimitieran en forma diversa dos miembros civiles de la Junta, diecinueve miembros del Gabinete, cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siete presidentes de Instituciones autónomas.

No es este momento de narrar la polémica entre los dimitentes y los voceros de la Fuerza Armada. Lo importante es resaltar que un grupo de personas capaces y honestas, después de haber puesto toda su ilusión y su talento al servicio de un proyecto de reformas profundas, testificaron la imposibilidad de llevarlo a cabo en una sociedad en la que dominan instancias opuestas a todo cambio, mientras el proceso esté hegemonizado por una Fuerza Armada cuyas características institucionales, históricas y psico-sociales le han hecho incapaz de tomar la defensa consecuente de los intereses reales de las masas populares. No fueron las acciones reivindicativas de las organizaciones populares lo que obligó a presentar la dimisión sino la falta de respaldo de la Fuerza Armada.



Un conocimiento más íntimo de las posibilidades concretas de la Fuerza Armada Salvadoreña llevó a decir a algunos de los funcionarios renunciantes: "En estas condiciones consideramos que se han agotado ya las posibilidades históricas de implementar en el país soluciones políticas como la que, con mucho empeño y buena fe, estábamos apoyando desde el 15 de octubre".

Estas formulaciones parecerán extremas a algunos, pero los hechos posteriores a su publicación parecen confirmar que los ex-funcionarios tenían razón.

El fondo de la cuestión está en la facilidad con que la oligarquía consigue alinear a los cuerpos de seguridad y a una parte de la Fuerza Armada en la defensa de sus intereses y en la oposición a los cambios. Hay algo en la organización y funcionamiento real de los Cuerpos de Seguridad que hace que invariablemente acudan, directa o indirectamente, a impedir que en el país se dé una democratización y se produzcan cambios estructurales. Pero como los Cuerpos de Seguridad caen también bajo el alto mando de la Fuerza Armada, se puede concluir que precisamente a ese nivel hay que buscar el pacto, siempre renovado, con los poderes oligárquicos. Parece así evidente que, mientras la actual Institución Armada no cambie substancialmente sus alianzas básicas, no será capaz, por más que abunden en sectores de ella buenas intenciones, de apoyar un cambio profundo e irreversible de las estructuras económicas políticas del país.

Desde esta convicción, basada en repetidas frustraciones, consideramos como ilusorio el intento del Partido

Demócrata Cristiano de salvar el proyecto reformista hegemónico por el Ejército. No alcanzamos a comprender por qué esperan los políticos demócratas cristianos que los mismos jefes militares que frustraron la primera etapa del proyecto reformista vayan a realizar la segunda etapa, que se perfila a nivel de programa como más radical que la primera; por qué esperan que el poder oligárquico fracase ahora en su alianza con los mismos altos mandos militares, con los que nunca antes fracasó. Aparte de que esta segunda etapa del proyecto reformista tiene menos base popular y menos apoyo ciudadano que la primera; y aparece más claramente como una amenaza al proyecto popular revolucionario.

Todo parece indicar que el proyecto reformista resultante del pacto militar democristiano no tiene viabilidad, porque no está garantizado por una fuerza real que esté dispuesta a oponerse al poder oligárquico hasta las últimas consecuencias. La Fuerza Armada no ha dado muestras de ser esa fuerza.

Si a eso añadimos que el propósito reformista de la Democracia Cristiana sirve de pretexto para justificar las acciones represivas de los Cuerpos de Seguridad y de la Fuerza Armada, como está ocurriendo desde los tiempos de la anterior Junta, aparece todavía más problemático el propósito político de ese partido. El anuncio y la promulgación legal de las reformas permite un recrudecimiento de la represión, porque los que no aceptan a la actual Junta, incluso cuando ofrece reformas, aparecen a los ojos de la Fuerza Armada como comunistas y subversivos a quienes se debe aniquilar. Por otra parte no parece viable conjugar la ejecución de profundas reformas estructurales, especialmente la Reforma Agraria, con una masiva represión de las organizaciones populares.

No por ello debe negarse toda posibilidad de que el actual Gobierno de la Democracia Cristiana desempeñe una función transitoria. Esta función no consistiría en la realización de profundas reformas estructurales para las que en las actuales circunstancias no hay viabilidad y que si se intentaran podrían fracasar dando pretextos nuevos a la oligarquía. Ni consistiría tampoco en llegar a unas elecciones para las que no hay condiciones todavía. Consistiría sobre todo en frenar la represión y en anular la capacidad de acción de los grupos para-militares y para policiales de la oligarquía y en ir neutralizando al grupo de militares afectos al proyecto capitalista, pues sobre todo esos ele-



mentos debería tener autoridad. Consistiría en definitiva en propiciar indirectamente una alianza cada vez más profunda de todas las fuerzas democráticas, con las que podría colaborar en la reestructuración de un nuevo proyecto nacional.

IV.- La Unidad Popular y la Respuesta de la Oligarquía

En medio de la crisis del proyecto reformista y de su salvamento por la Democracia Cristiana se va gestando rápidamente en el ámbito de la izquierda opositora un proceso de unidad. La unidad de las organizaciones populares entre sí y la consiguiente apertura a otras corrientes más moderadas es un fruto del tiempo y de la experiencia política adquirida en la lucha. Es una muestra de madurez y de realismo que resulta de la franca confrontación con otras concepciones revolucionarias y otras tácticas políticas. Y no en menor grado influye en su gestación la percepción de que el acceso al poder del Estado estaría cada vez más próximo.

Este proceso de unidad comenzó con el pacto de formación de la Coordinadora Nacional que suscribieron las organizaciones populares BPR, FAPU y Ligas Populares 28 de Febrero y el Partido UDN. Este proceso de unidad, en el que también participan a su nivel las FPL, el PCS y la RN, no se concibe solamente como una unidad de las organizaciones revolucionarias entre sí, sino también como un proceso de apertura y de alianza con fuerzas democráticas y progresistas, fuerzas por lo tanto más moderadas, pero también comprometidas a romper las estructuras del dominio oligárquico.



La incipiente unidad de las agrupaciones de izquierda y el anuncio de la gran manifestación para el 22 de enero vinieron a sembrar el pánico en la clase dominante, ya intranquila por el anuncio de las reformas y acosada por las organizaciones populares, y a perturbar con su retórica revolucionaria a las capas medias, ya afligidas por las confrontaciones ideológicas. La primera reacción de la oligarquía fue desfigurar ante la opinión pública el significado verdadero de la unidad popular, presentándola como una declaración de guerra a todo el resto de la sociedad, como una alianza de tribus guerreras para masacrar a pacíficos ciudadanos y acabar con los sectores medios. Inmediatamente después comenzaron a preparar un clima de provocación a la izquierda para que ésta emprendiera acciones espontáneas y suicidas. Esperaban así unificar a una Fuerza Armada dividida e inquieta y ponerla frente a las organizaciones populares; así acabarían también los proyectos reformistas. Eligieron como momento crucial la manifestación del día 22.

La agresión a la manifestación pacífica del 22 de enero fue cuidadosamente preparada, ya que parece que de ella se esperaba el comienzo de graves disturbios, intentos de insurrección y la respuesta contundente de los cuerpos represivos y eventualmente la intervención de la Fuerza Armada.

Se preparó a la opinión pública para los graves disturbios que habría de desatar la ultra izquierda en respuesta a la agresión armada. Incluso se señalaron responsables de lo que esperaban tendría que suceder. Por la prensa, radio y los canales de televisión se fue creando la imagen de una izquierda en pie de guerra, que había elegido el aniversario del levantamiento de 1932 para comenzar una insurrección popular.

Varios días antes de la manifestación comenzó el hostigamiento, que por otra parte fue intenso pero no lo suficiente como para desanimar al pueblo organizado. La víspera de la manifestación se ametralló los edificios de la Universidad Nacional donde pernoctaban grupos de manifestantes así como los locales de FENASTRAS y del BPR. Y ya el mismo día de la movilización se roció con un poderoso insecticida a una gran masa de gente.

Muchos miles de personas, entre ellas algunos miembros de este Consejo Superior, fueron testigos de cuán ordenada, pacífica y alegre discurría la más grandiosa manifestación de la historia de El Salvador, cuando



fue agredida a balazos desde varios edificios oficiales. Como es costumbre en estos casos, se han sucedido explicaciones oficiales que tratan de eximir de toda responsabilidad a los Cuerpos de Seguridad. No vamos a entrar a examinar las contradicciones, las inverosimilitudes y en definitiva las falsedades que contienen las sucesivas notas oficiales. Bástenos recordar que el primer comunicado que emitió la Fuerza Armada reconocía que habían disparado los Cuerpos de Seguridad, aunque como respuesta —decía la nota— a una agresión previa. El pueblo desgraciadamente está acostumbrado a este tipo de situaciones y sabe qué juzgar de ellas.

Pero no fue ésta la única respuesta, aunque si la más llamativa por el carácter indiscutiblemente pacífico de la manifestación y por el salvajismo y premeditación de la represión. Parecería que tras esa grandiosa manifestación se hubiese desatado una guerra de exterminio contra las fuerzas populares integrantes de la unidad popular. Se ha empezado a perseguir sistemáticamente y a asesinar a miembros prominentes del UDN, a integrantes del BPR, del FAPU y de las Ligas 28; ha aumentado la impune actividad de las escuadras asesinas de la UGB y la de otros grupos para-militares como en los peores tiempos de Romero y de Molina. Con el pretexto a veces de enfrentamientos provocados por subversivos han caído sólo en el mes de enero más de dos centenares de miembros de las organizaciones populares. Todo ello nos coloca en la situación anterior al 15 de octubre que obligó al levantamiento militar y nos pone en situación peor a la que condenó la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y otros organismos internacionales. Disminuyen los desaparecidos pero aumentan notablemente los asesinados.

Este Consejo Superior levanta su voz de protesta por una masacre tan inhumana y salvaje; protesta por la represión al pueblo organizado y no organizado que no sólo no ha disminuido durante dos gobiernos que se autodenominan revolucionarios, sino que ha alcanzado cotas superiores a las de regímenes pasados, que fueron universalmente repudiados.

Responsabilizamos al alto mando de la Fuerza Armada por autorizar, tolerar y dejar impunes estas masacres de hombres, mujeres y niños por el solo hecho de luchar por una vida digna y una sociedad justa. Sabemos que no todos los miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña están de acuerdo con estos procedimientos, ya que precisamente



por esa razón se sublevaron el 15 de octubre de 1979. A ellos les pedimos que protejan la Institución Armada de tanta sangre inocente y al pueblo salvadoreño de tanta bala asesina.

Pedimos que se descubra a los culpables morales y materiales y que se les juzgue con la severidad que exigen crímenes tan horrendos. Así como pedimos que las medidas necesarias para garantizar el orden ciudadano y los derechos de todos sean proporcionadas y mesuradas a la gravedad de las acciones. Nunca se puede castigar con la muerte faltas y delitos que la ley no considera de tal gravedad.

No creemos que la Junta de Gobierno pueda salvar su responsabilidad alegando que no ha dado orden alguna represiva. Estamos dispuesto a creer esto; pero no podemos pasar por alto que, al entrar voluntariamente en un esquema de poder en que el Gobierno paralelo es una consecuencia normal, se hacen cómplices de lo que el "otro" gobierno autorice, tolere o deje impune. Sólo mostrando una firme y eficaz acción de control real sobre los Cuerpos de Seguridad y sobre la Fuerza Armada puede salvar en parte su responsabilidad.

V.- Perspectivas de Solución

El balance de nuestras reflexiones hasta este momento puede parecer netamente negativo. Sin embargo, nosotros no podemos admitir que la alternativa ante la que está El Salvador sea: O proyecto reformista o guerra civil. Creemos que la realidad social es más rica y más dinámica y que no se puede dar como fija o inevitable una solución concreta. Nuestra historia la hacemos todos nosotros; debemos pues dirigirla por cauces objetivamente viables y transitables.

Ya hemos rechazado como posibilidad definitiva de solución el proyecto reformista hegemonizado por la Fuerza Armada, tal como se está dando hoy día. La exclusión en él de una participación hegemónica de los grupos populares y democráticos, la cadena creciente de represiones y muertes, su escasa base de apoyo en fuerzas que sean activas y relevantes, la situación de incertidumbre y desasosiego reinantes hacen imposible su viabilidad. Es por eso lamentable que Gobiernos poderosos, interesados en un cierto tipo de equilibrio político en El Salvador, no apren-





dan de la represión que azota al país cuáles con las soluciones verdaderas para nuestro pueblo y sigan apoyando insistentemente a las mismas instancias de poder, que ya fracasaron anteriormente en el respeto de los Derechos Humanos y en la pacificación del país.

Pero también rechazamos como única e inmediata alternativa la guerra civil. Es cierto que puede hablarse ya de una sorda guerra civil, si es que atendemos al número de víctimas sobre todo entre las organizaciones populares. Pero todo se convertiría en algo inmensamente peor, si se diera un levantamiento popular armado o un enfrentamiento abierto y total entre la Fuerza Armada y los grupos armados de la izquierda. El tremendo costo de esta solución en vidas humanas y en recursos materiales tan indispensables para la supervivencia del país hace que deba buscarse otro "principio de solución."

Por eso consideramos que no puede rechazarse como avance en el proceso el proyecto de unidad popular en lo que tiene de apertura, alianzas nuevas, desradicalización y negociación, como una alternativa por una parte al reformismo hegemonizado por la Fuerza Armada y a la guerra civil por otra.

El avance cualitativamente nuevo que supone el comienzo de alianza entre las distintas organizaciones populares y, en otro nivel, entre algunas de las organizaciones político-militares, así como su invitación a participar en ella a las fuerzas antes enmarcadas en el Foro Popular y aun a otros grupos sociales, de los que no están excluidos los pequeños y medianos empresarios, parecen indicar una racionalización de la izquierda, que puede y debe profundizarse. Incluso los bosquejos de solución política al futuro de nuestro país han dejado de presentarse en términos maximalistas y atienden cada vez más a la correlación de fuerzas existentes en la actualidad dentro y fuera del país. El grado de disciplina, responsabilidad ciudadana y madurez política que mostraron los más de cien mil participantes en la manifestación del 22 de enero, aun después de ser criminalmente provocados, indica la madurez de un pueblo organizado, que no busca el desorden o la venganza, como pretenden sus enemigos.

Es cierto que en contrapartida siguen dándose acciones armadas, que van más allá de lo que exige la propia defensa y la resistencia a un agresor injusto. Es cierto que no han quedado fijadas todavía las reglas del nuevo pacto social y que aún quedan resquemores y actitudes subjetivas,

residuo de confrontaciones anteriores. Es cierto que falta todavía un proyecto político común respaldado por todas las fuerzas progresistas y democráticas. Efectivamente la unidad popular es una realidad que está comenzando, por eso mismo todos tenemos la posibilidad de colaborar para que el proceso responda a los intereses objetivos, materiales y morales de la mayoría de nuestro pueblo y garantice los cambios que tantas personas y grupos sociales queremos. La unidad popular no es todavía una cosa hecha y acabada, es algo que todavía está en germen y que será lo que sus forjadores la hagan. Es una posibilidad y como toda posibilidad, una esperanza. Pero si la unidad popular llegara a ser la expresión y la fuerza de la gran mayoría de sectores revolucionarios, demócratas y sinceramente reformistas pudiera ser el muro de contención, "la ferrea muralla" contra la que una minoría, por más poderosa que se considere, se acabaría estrellando. Mucho queda por hacer en este nuevo camino que merece ser emprendido con clarividencia y responsabilidad. Hay que solidificar la unidad dejando de lado sectarismos y dogmatismos pasados, aunque sin abandonar el cultivo de las fuerzas propias de las organizaciones populares. Hay que profundizar en el diálogo para llegar a un esquema aceptable de proyecto nacional. Hay que tener muy en cuenta las necesidades objetivas de todo el pueblo, los temores justificados de las clases medias y las exigencias reales del proceso económico. En anteriores Pronunciamientos hemos expuesto directrices generales de ese necesario proyecto nacional, que implica el desarrollo efectivo de un proceso de profundos cambios sociales revolucionarios, asumido y dirigido por el pueblo a través de sus organizaciones representativas. No es esta la ocasión de entrar en detalles más precisos. Pero sí la de anunciar nuestra esperanza de que si esto llegara realizarse se haría verdad aquello de que la salvación viene del pueblo y que sólo con el pueblo podremos encontrar el camino de la liberación definitiva.

Febrero 2 de 1980

Tomada de LA PRENSA GRAFICA, martes 5 de febrero, 1980